

ARTICULOS

LAS PRIMERAS VICISITUDES DEL DIALOGO ENTRE EL GOBIERNO Y EL FMLN-FDR

Tomás R. Campos

RESUMEN

Después de las dos primeras conversaciones entre el gobierno del presidente Duarte y los representantes del FMLN-FDR, el autor del siguiente artículo ofrece un análisis objetivo con el propósito de que todos los actores del conflicto puedan reflexionar y sacar lo más posible de este nuevo instrumento del diálogo.

Para ello, el autor se pregunta, en primer lugar, qué hay tras el ofrecimiento de diálogo por parte del presidente Duarte y tras la aceptación rápida por parte del FMLN-FDR. Luego analiza el relativo éxito del primer encuentro en La Palma el 15 de octubre y el relativo fracaso de Ayagualo el 30 de noviembre. Entre la primera y la segunda conversación se estuvo muy cerca del veto militar, el cual solamente pudo ser evitado después de una larga reunión del presidente Duarte con los oficiales de la Fuerza Armada. El autor subraya que la extrema derecha dio un golpe casi contundente al diálogo como solución al conflicto nacional. Esto hizo que la disposición al diálogo del presidente Duarte y sobre todo su capacidad de iniciativa audaz quedaran muy recortadas. En cambio, el FMLN-FDR, considerando fuerte su posición militar, se presentó más dispuesto a proponer su planteamiento que a consolidar la vía difícil del diálogo en Ayagualo.

En la tercera parte del artículo el autor estudia por separado la propuesta presentada por el presidente Duarte en la asamblea general de las Naciones Unidas y la del FMLN-FDR presentada sistemáticamente en Ayagualo. De este análisis concluye que no todo es pura oposición, por lo tanto, a continuación busca las coincidencias parciales de ambas propuestas las cuales pueden llevar a acuerdos posteriores. También analiza los puntos de divergencia, cuya importancia no puede oscurecer.

Finalmente, sin esconder las dificultades de que el diálogo prospere y lleve a soluciones definitivas, el artículo explora las posibilidades de consolidación del proceso iniciado como alternativa a la solución militar.

El 8 de octubre anunciaba el presidente Duarte su iniciativa de iniciar el diálogo con los representantes del FMLN. Lo hacía ante la Asamblea General de las Naciones Unidas cogiendo de sorpresa a propios y extraños. Se había hablado mucho de la necesidad del diálogo, se conocían los intentos del FMLN-FDR por echarlo a andar, se suponía que el PDC y Duarte estaban a favor de él, pero no se esperaba que el diálogo pudiese empezar tan pronto, de forma tan llamativa y solemne y a tanto alto nivel. También sorprendió la rapidez con la que el FMLN-FDR aceptó la propuesta, ciertamente no esperada por los frentes ni en sí misma ni en el modo de su ofrecimiento. Por fin en El Salvador se estaba dando el comienzo de algo realmente nuevo que pudiera contribuir a la solución de la guerra y del conflicto social. La guerra y las elecciones junto con las reformas habían sido hasta ahora los medios para acabar con el conflicto. Con sólo ellos no parecía haberse avanzado mucho o, al menos, no se había encontrado el camino seguro para acabar con él. Quizá por ello se recurría a algo realmente nuevo, que si no era todavía negociación estrictamente tal, como lo proponía el FMLN-FDR, se le acercaba bastante.

Ya se han tenido dos sesiones del diálogo y han transcurrido dos meses y medio desde que se desencadenó el proceso. Para consolidarlo de modo realista es conveniente analizar lo ocurrido hasta ahora, cosa que no se pudo hacer en el editorial que nuestra revista dedicó al problema en su número de octubre-noviembre. Se han dado muchas reacciones emotivas inmediatistas que no ayudan a sacar el mayor fruto posible de este proceso en favor del pueblo salvadoreño, el cual ve angustiado cómo se prolonga una guerra sin percibir todavía cuándo pueda terminar, una guerra a la cual atribuye el máximo de responsabilidad del incesante deterioro económico de su situación, que ya era mala en 1979 y que día a día se va haciendo peor hasta llegar a extremos soportables por la paciencia estoica del pueblo y/o por el terror que se ha abatido sobre él, pero intolerable desde todo punto de vista ético y político. Quizá un análisis objetivo pueda favorecer a que todos los actores del conflicto así como los que lo soportan puedan reflexionar y sacar lo más posible de este nuevo instrumento, que tiene en sí grandes virtualidades, pero cuya utilización y manejo puede enfrentar enormes dificultades.

1. Las razones del inicio del diálogo

El diálogo en la última concreción que ha adquirido se presenta como un ofrecimiento del presidente Duarte aceptado rápidamente por el FMLN-FDR. Hay que preguntarse qué hay tras ese ofrecimiento y tras esa aceptación.

La última iniciativa fue del presidente Duarte, aunque éste no se atrevió a hacerla pública hasta que pudo contar con el apoyo de Estados Unidos, la Fuerza Armada, la empresa privada y algunos de los partidos políticos. Por eso hay que preguntarse la razón de esa iniciativa y también la razón del apoyo recibido, sin el cual aquella no hubiera pasado a ser realidad.

Más allá de todo protagonismo político —no obstante ser éste un factor importante en el caso de Duarte— puede pensarse que el presidente vio en la propuesta del diálogo una forma de tomar la iniciativa política y un modo de introducir un nuevo dinamismo que pudiera acelerar el final de la guerra. El tomar la iniciativa política le era necesario pues de lo contrario su presidencia iba a quedar reducida a responder a las exigencias de los demás, tanto a las de los representantes del gran capital como a las del FMLN-FDR; si no lo hacía pronto, tal vez ya no podría hacerlo, nunca, con lo cual su gobierno y su partido —al que le esperan en marzo próximo unas elecciones cruciales— quedarían muy seriamente debilitados. Pero también le era necesario acelerar el final de la guerra, pues su prolongación traía a su gestión presidencial dos impedimentos muy graves: primero, el dejar descontento al pueblo porque es imposible un mínimo desarrollo económico con un presupuesto lastrado por una economía de guerra y por una guerra que sigue su labor de destrucción sobre la casi totalidad del país y sobre todos y cada uno de sus sectores; segundo, porque la prolongación de la guerra lleva consigo el fortalecimiento político del estamento militar, lo cual dificulta seriamente la democratización del país, así como la profundización de la dependencia de Estados Unidos, lo cual limita radicalmente la capacidad de autodeterminación del pueblo salvadoreño.

Hasta aquí los elementos más puros de la iniciativa presidencial, que ciertamente fue audaz y dejó desconcertados de momento a muchos sectores del país, especialmente a la extrema derecha e incluso a la embajada de Estados Unidos. Sin duda han intervenido otros elementos. Duarte ha sido presionado a favor del diálogo por la democracia cristiana internacional y especialmente

por la República Federal de Alemania; asimismo se ha visto forzado por el viraje que se dio en la propuesta del grupo de Contadora, cuando la "belicista y revolucionaria" Nicaragua aceptó sin enmiendas un borrador de proyecto que pretendía terminar con la militarización progresiva del área, con el influjo de potencias exteriores en ella y con la desestabilización política inducida desde fuera de cada uno de los países. Por otro lado, Duarte podía lanzarse a este riesgo calculado y controlado, porque le quedaba siempre la posibilidad de volverse atrás, si el FMLN-FDR no cedía en puntos sustanciales y no se aproximaba a su propuesta enmarcada dentro de la Constitución. Aunque su iniciativa pudiera traerle riesgos y aunque pudiera terminar en fracaso, podrían manejarse aquellos y éste, echándole la culpa a sus adversarios; si, en cambio, la iniciativa prosperara, el pueblo lo iba a reconocer como uno de los personajes más importantes en la historia de El Salvador. Duarte, por otra parte, mantiene la ilusión de que su revolución democrática puede servir de modelo para otros muchos países y el éxito de la misma depende en gran parte de una solución política pronta a la guerra y a lo que está detrás de ella.

Algunas de estas razones explican, en parte, el apoyo nacional e internacional que recibió muy pronta y fácilmente su iniciativa. Estados Unidos, la Fuerza Armada y la gran empresa privada pensaron que en el diálogo no había de momento nada que pudiera poner en peligro los proyectos y las seguridades que cada uno de ellos estimaba indispensables. Estados Unidos sabe bien la dependencia que el gobierno de Duarte tiene del apoyo norteamericano en casi todas y cada una de las esferas de acción del gobierno salvadoreño, apoyo que en contrapartida exige no entrar en colisión con ninguna de las líneas maestras del plan estadounidense para el área centroamericana y para El Salvador en particular; la autonomía del gobierno de Duarte en este punto es muy reducida de momento. La Fuerza Armada tampoco vio en un primer momento especiales dificultades para el diálogo, pues sabía de la aprobación norteamericana, lo cual suponía para ella garantía de que no iba a ser debilitado su poder, aunque también era un límite, pues sabía del respaldo que la administración Reagan daba al gobierno demócrata cristiano y a Duarte en particular. La empresa privada, representada por ANEP, no rechazó de momento el diálogo, pues fue tomada de sorpresa y especialmente consulta-

da y tenida en cuenta por intermediarios afines a ella y al gobierno quienes le aseguraron de la conveniencia del diálogo para terminar pronto con la guerra de modo que el FMLN dejara de ser una amenaza para ellos, si se sometía al juego constitucional de las elecciones.

En conclusión, a todo el sector gubernamental y antirrevolucionario le parecieron mayores las ventajas que los riesgos. Si el diálogo triunfaba se daría un acortamiento de la guerra sin mayores concesiones al adversario; si el diálogo fracasaba no se apreciaba nada malo o simplemente distinto de lo que hasta ahora ocurre, antes al contrario se darían nuevas razones para acentuar la presión militar, que es en definitiva la línea maestra de las respectivas políticas de cada uno de los grupos mencionados. Los partidos políticos, excepto AD, fueron tenidos poco en cuenta, porque parte de la maniobra iba dirigida a consolidar al PDC y a adibilitar directamente a ARENA y también al PCN en vista a las próximas elecciones.

No deja de sorprender que también el FMLN-FDR aceptara inmediatamente la propuesta del diálogo, aunque por razones muy distintas a las que movían a sus adversarios. Ante todo, la oferta recogía algo que ellos habían presentado de antemano hacía ya varios años y más particularmente con ocasión del triunfo electoral de Duarte; con ello se lograban dos puntos muy importantes: el reconocimiento de lo que el FMLN-FDR supone en la actual correlación de fuerzas en El Salvador y la confirmación de lo razonable que era su propuesta de diálogo/negociación, hasta ahora tildada de imposible o al menos de inaceptable. A este reconocimiento oficial de su presencia real en El Salvador se añadía que del diálogo podrían sacarse ciertas ventajas. Ante todo, aquellas que habían sido su objetivo cuando su primer ofrecimiento en los primeros meses de 1981: crear divisiones dentro del bloque contrario, por cuanto la posición de sus distintos componentes ante el FMLN-FDR es muy distinta; incluso dentro de la Fuerza Armada podría darse un principio de división entre los más duros derechistas y los más razonables centristas. También estaban las ventajas que había pretendido obtener con sus repetidas propuestas, no siempre oficializadas, a lo largo de los años siguientes: seguir profundizando esas divisiones, abrirse campo entre sectores a los cuales antes no tenía acceso y amoldarse a la situación que imponía la prolongación de la guerra. Pero es que, además, la

oferta de Duarte se presentó en un momento, cuando el FMLN-FDR veía la necesidad de encontrar una nueva vía política que pudiese recorrer una vez rechazada la de las elecciones, rechazo que les hacía aparecer inconvenientemente como militaristas intransigentes. Con ello a los triunfos militares repetidamente obtenidos, y cuya efectividad política y social es innegable, se sumaba un resonante triunfo político al obligar a todos sus adversarios, incluido el sector militar a aceptarlo como contrapartida de un diálogo de alcance nacional.

Ya iniciado el diálogo podrían sacarse de él provechos importantes que sin debilitar su poderío militar les podrían permitir aumentar su poderío político, además de conseguir eventualmente mejores condiciones de tipo humanizador para seguir adelante con su proyecto estratégico fundamental. Sin duda tendrían que hacer concesiones de las cuales la principal es el reconocimiento oficial de sus adversarios cuando militarmente no han logrado inclinar el equilibrio militar a su favor, lo cual hasta cierto punto muestra alguna debilidad y compromiso inicial, ciertamente no mayor que los de sus adversarios.

Ambas partes recuperaban así una nueva presencia ante el pueblo, que sin duda demanda paz justa y solución pronta al conflicto para poder superar las causas del mismo. Ambas partes sienten que ese pueblo está cansado de la prolongación de la guerra y ninguna de ellas quiere tomar sobre sí la responsabilidad de sus efectos los cuales siguen acumulándose desde 1979. Sólo las partes más extremistas de cada uno de los bandos siguen pensando que es la victoria militar y la toma no compartida del poder los resultados mínimos que deben obtenerse después de tantos sacrificios. Los demás, sin dejar de pensar que el triunfo militar podría ser lo mejor —no es el caso de Duarte, pues ese triunfo supondría la derrota de la guerrilla, pero también la consolidación indebida del poder de los militares— se estarían acomodando más a la realidad.

2. Del relativo éxito de La Palma al relativo fracaso de Ayagualo

En La Palma, el 15 de octubre tuvo lugar un encuentro histórico. Cuatro máximos representantes del gobierno, incluidos el propio presidente y su ministro de defensa se sentaron en la mesa



Duarte vio en la propuesta del diálogo una forma de tomar la iniciativa política y un modo de introducir un nuevo dinamismo que acelerara el final de la guerra.



El FMLN-FDR vio en la propuesta de diálogo un resonante triunfo político al obligar a todos sus adversarios a aceptarlo como contrapartida de un diálogo de alcance nacional.

del diálogo ante cuatro representantes del FMLN-FDR, incluidos los máximos responsables del FDR y algunos jefes de la guerrilla, aunque no los más altos y conocidos. La presencia del comandante Villalobos fue impedida por dificultades de última hora independientes de su voluntad, claramente expuesta. Anteriormente se había acordado la ausencia de hombres armados y de los respectivos ejércitos en un radio de diez kilómetros, acuerdo que en lo fundamental fue bien cumplido, con lo cual el diálogo se presentaba en un primer momento casi como si se diese *inter pares* entre iguales. Se trató asimismo de que el pueblo se hiciese presente y efectivamente en La Palma hubo presencia masiva de simpatizantes del FMLN-FDR y también de la parte gubernamental.

El mayor éxito de esta reunión fue el encuentro mismo y el modo como tuvo lugar. Se había dado el primer paso que por tantos años había parecido imposible y los que hasta entonces se habían considerado entre sí como enemigos irreconciliables se sentaron a dialogar con espíritu de transigencia y de fácil comunicación. No hubo posturas intransigentes, aunque sí firmes, y se abrió en el fondo y en la forma un

nuevo cauce, un nuevo método con el cual dirimir las diferencias. Cuando por el comunicado final se supo que la segunda ronda se tendría antes de finales de noviembre se despertó en ambas partes un eufórico sentido de triunfo. El inicio del diálogo había sido posible y parecía abrirse un proceso nuevo que, con todas sus dificultades, podría suponer un serio y aun rápido avance al menos hacia metas parciales que ayudarían a facilitar la solución del conflicto.

Ambas partes dialogantes consideraron que habían sacado grandes ventajas. El gobierno y especialmente su presidente sintieron que su iniciativa había sido muy bien recibida nacional e internacionalmente y que habían añadido a la justificación y legitimación recibidas de las urnas el apoyo popular suplementario, suscitado por una medida política audaz que había salido en apariencia bien; aumentó con ello la consistencia política de Duarte y, consecuentemente, quedó debilitada la de sus adversarios, al tiempo que un cierto aire de esperanza nacional se dejaba sentir por todo el país; hasta cierto punto las fuerzas militares se habían sometido a las civiles y se había logrado, por añadidura, acallar de momento a las fuerzas más retrógradas del país, que

una y mil veces se habían opuesto a todo acercamiento dialogante con la guerrilla. También el FMLN-FDR salió fortalecido de este primer acercamiento, pues no sólo era reconocida oficial y públicamente su presencia —el gobierno le permitió hacer uso en pie de igualdad con él de los medios de comunicación— como fuerza decisiva en el país, sino que se presentó por primera vez ante la opinión pública nacional e internacional, pero especialmente ante el pueblo salvadoreño que percibe habitualmente su imagen muy desfigurada, como una fuerza racional, capaz de encontrar a través del diálogo soluciones de compromiso, que sin suponer abandono de sus principios, permitían nuevas posibilidades prácticas en orden a un gran encuentro nacional de los verdaderos intereses populares.

Quienes salieron en realidad perdedores fueron los que se alistan en la extrema derecha económica, militar y política (ANEP, ciertos sectores de la Fuerza Armada y ARENA) y que han defendido como mejor solución para el país la de la violencia armada sin concesión alguna contra la guerrilla. Aunque habían tolerado este primer paso, pronto se dieron cuenta de su peligrosidad, al percibir de cerca que ambas partes dialogantes se estaban embarcando en un proceso nuevo con toda seriedad, el cual podría llevar a consecuencias incalculables y nefastas para ellos. Tal fue el impacto recibido que su reacción pública fue muy moderada, como si no se atrevieran a ponerse en contra del sentir popular y del respaldo público que la iniciativa de Duarte había conseguido del propio presidente norteamericano, quien en dos ocasiones alabó la audacia y la legitimidad del gesto del presidente salvadoreño. Pero su reacción fue inmediata presionados los relativamente moderados por los más extremistas, como ya ocurrió en 1973, en 1976 y en 1979 ante acontecimientos que tenían que ver con algunos avances sociales y políticos. Aunque ANEP aceptó estar presente en la comisión asesora del diálogo pronto se retiró de ella para no avalarlo con su presencia; vuelta a su centro natural empezó con sus aliados a renovar algunas de sus viejas tácticas las cuales pudieron dar al traste con el diálogo recién iniciado. Y cuanto antes mejor, antes de que pudiera consolidarse. La continuación y aun endurecimiento de la guerra y el sabotaje que costó la vida al teniente coronel Monterrosa y a otros jefes militares importantes en la conducción de la guerra dieron ocasión para reorientar su táctica ante el diálogo. Lo que al

principio fue un intento de desvirtuación para que no se concediese nada que les fuera adverso, fue muy pronto un intento de boicot que podría conseguir la paralización del mismo y aun, tal vez, la neutralización de Duarte cuando no su desaparición de la arena política.

Su efectividad fue de momento grande. La Fuerza Armada empezó a vacilar en su apoyo a la iniciativa gubernamental. Los conocidos jefes militares, entre ellos el coronel Bustillo, que no se muestran muy partidarios de modos y métodos más conciliadores hicieron sentir entre sus compañeros de armas a dónde les podía llevar esta iniciativa del diálogo; varios jefes de las brigadas departamentales les hicieron eco. Se había pasado del apoyo condicionado y no entusiasta a la resistencia pasiva y de ella a la presión sobre los elementos civiles del gobierno. Una vez más la extrema derecha política y económica recurrió a su viejo método de cercar el estamento militar para conseguir, por presiones ideológicas y de todo tipo, que se pusiese a su lado. Lo consiguieron en parte. El presidente tuvo que poner en juego toda su autoridad y su habilidad política para convencer a los militares de que le permitieran seguir con su proyecto y que lo dejaran tener la segunda ronda en las fechas fijadas durante la primera reunión. Evidentemente tuvo que dar seguridades nuevas de respeto absoluto a la Constitución y de no tocar para nada la estructura de la Fuerza Armada. Esto hizo que su disposición al diálogo y sobre todo su capacidad de iniciativa audaz quedaran muy recortadas. Se había estado muy cerca del veto militar y sólo el 19 de noviembre, tras una larga reunión con los principales jefes y oficiales, se había podido conseguir luz verde para reemprender el diálogo el 30 de noviembre. La extrema derecha militar, económica y política no había conseguido todo lo que pretendía, pero había dado un golpe casi contundente al diálogo como solución real del conflicto nacional. Duarte pudo sobrepasar la dificultad y aun ver esta superación como un sometimiento logrado por él del poder militar al poder civil, pero de momento las potencialidades del diálogo quedaron muy disminuidas.

Por su parte el FMLN-FDR se percató pronto de las posibilidades del nuevo paso y se dispuso a jugarlas de lleno, sin conocer la debilidad de la otra parte. En La Palma no había podido presentar sus puntos de vistas fundamentales sobre el diálogo porque no había tenido tiempo material de prepararlos, dada la urgencia de la convo-

El mayor éxito de La Palma fue el encuentro mismo y el modo como tuvo lugar. Se había dado el primer paso que por tantos años había parecido imposible.

atoria. Con un mes y medio por delante el FMLN-FDR se decidió a presentar sin recortes todo su proyecto fundamental para el futuro del país. Considerando que es fuerte su posición militar, lo cual había demostrado en los días transcurridos entre la primera y la segunda sesión, vino más dispuesto a proponer su planteamiento que a consolidar la vía difícil del diálogo. Por otro lado, al enviar a Ayagualo una misión de segundo orden no podía jugar con la flexibilidad que la novedad de los acontecimientos podría exigirle. No quiso entrar directamente en la discusión de la propuesta concreta de Duarte, sino que consideró necesario dejar muy en claro y muy en firme la suya. Y aquí empezaron las dificultades.

Si en La Palma se inició el hecho mismo del diálogo y éste fue su éxito mayor, en Ayagualo se presentaron frente a frente dos propuestas fundamentalmente distintas, lo cual mostró de inmediato lo encontrado de las posiciones y lo difícil de la concertación. Todo lo demás ocurrido en Ayagualo es de menor importancia: las discusiones sobre el modo de proceder, la reglamentación de la comisión mixta o especial e incluso la discusión sobre una tregua o cese del fuego, no eran lo principal. Ni siquiera lo fue, como debía haber sido, el asegurar la posibilidad de que el diálogo se consolidase. Lo fue, en cambio, la presentación clara y definida de las posiciones fundamentales de ambas partes. Esto hizo que algunos pasasen de la euforia a la depresión e hizo que los demás vieran la reunión de Ayagualo, si no como un fracaso absoluto, sí como un paso atrás de lo que había supuesto la reunión de La Palma. Prácticamente sólo la Iglesia, por medio del moderador principal Mons. Rivera, arzobispo de San Salvador, se atuvo a lo que de positivo había tenido la reunión y animó a proseguirla.

Las reacciones del gobierno y especialmente del presidente Duarte fueron prematuras y excesivamente pesimistas. La razón principal de ellas está en el pasado inmediato de la presión a la cual se había visto sometido por los militares. Tras la reunión de Ayagualo y, sobre todo, tras la intervención en público del comandante guerrillero Facundo Guardado ante las cámaras de la televisión, los militares adversarios del diálogo pudieron reconfirmarse en lo contraproducente que podía ser el diálogo no controlado por ellos,

cuando si controlan hasta cierto punto la marcha de la guerra y aun las líneas generales de la política gubernamental. Duarte intentó recuperar la confianza de los militares en su gestión y hasta amenazó con retirar su oferta de diálogo, si es que se hacía de éste una maniobra táctica. La verdad es que el FMLN-FDR en vez de hacer maniobras tácticas y ocultar sus propósitos ideales había puesto sus cartas al descubierto para que nadie se llevara a engaño. Pero esto era demasiado para lo que los militares estarían dispuestos a tolerar. Por eso, el presidente se esforzó en recuperar la confianza de jefes y oficiales, lo cual hasta cierto punto había logrado en los primeros meses de su mandato, pero no hasta el punto de ofrecerle un cheque en blanco para todas sus iniciativas políticas, incluso las que caen estrictamente dentro del marco constitucional.

Afortunadamente en Ayagualo se llegó al propósito de continuar pronto con el diálogo. El proceso no se rompió ni por parte gubernamental ni por parte del FMLN-FDR, quien además hizo la pequeña concesión de permitir el libre tránsito por carretera en las fiestas navideñas y de fin de año, pero no concedió la tregua total en esos mismos días. Este último punto, poco favorable para él fue corregido poco después al ofrecer una tregua de seis días repartidos entre los días de Navidad y los de cambio de año. No todo había acabado mal.

Sin embargo, la extrema derecha económica, política y militar, que había salido golpeada de la reunión de La Palma salió fortalecida de esta segunda reunión. No logró todos sus propósitos, pero se recuperó y se atrevió de nuevo a hacer públicas sus objeciones al diálogo e incluso a amenazar una vez más a los representantes de la Iglesia que lo favorecían. Una vez más la vieja estrategia, que tantas veces le ha dado buenos resultados, se puso de nuevo en marcha. A esa estrategia le falta de momento el echar mano del terror y de los escuadrones de la muerte para impedir por la fuerza lo que no les conviene, lo cual hace que pueda apreciarse un cambio, si no en sus actitudes fundamentales, sí en sus tácticas. Pero todo podría llegar, si es que las presiones políticas y económicas no consiguen el resultado apetecido de terminar con el diálogo y con la posibilidad de hacer presentes y eficaces las exigencias del FMLN-FDR.

La administración Reagan también quedó un tanto desconcertada y, aunque siguió dando un apoyo genérico al diálogo, ya no lo hizo con el entusiasmo que mostró ante la primera reunión. Al parecer esperaba una posición más conciliadora por parte del FMLN-FDR; estimaba que el camino de las elecciones seguía siendo el único camino posible, pero se encontró con que el FMLN-FDR no estaba dispuesto a caer prematuramente en la trampa de las elecciones, si antes no se daban las condiciones reales suficientes para que éstas fueran verdadera expresión de la voluntad popular y, sobre todo, si no se daban garantías totales —de ahí la insistencia en el problema de la constitución del ejército—, de que se respetase el veredicto de las urnas. Al parecer, el proceso del diálogo entraba por un rumbo que no favorecía la estrategia general norteamericana, mucho más preocupada de su hegemonía en el área centroamericana que de cualquier formalismo democrático. Los pretextos y los tópicos volvieron a repetirse así como las disculpas a los incumplimientos de esos pretextos y de esos tópicos por parte sobre todo del estamento militar.

Todo ello ha hecho que el ambiente se haya enrarecido de nuevo y que el diálogo se haya vuelto más difícil. No imposible, pero sí más difícil. Cada vez son más numerosas y más fuertes las voces que se levantan contra el diálogo. Por otro lado, ciertos acontecimientos nacionales como la discusión de la ley electoral y la aproximación de las nuevas elecciones van desdibujando un tanto el perfil esperanzador con que se había presentado la iniciativa del diálogo, que todavía no ha fracasado, pero que desde luego no ha salido fortalecida de los últimos acontecimientos. La casi seguridad de una nueva reunión en el próximo enero se presenta así como una coyuntura delicada de la que mucho puede depender, no sólo para el proceso en sí, sino para el apoyo popular que pueda merecer, capaz de contrarrestar lo que la extrema hará para enterrarlo de una vez por todas.

3. Presentación de las propuestas del gobierno y del FMLN-FDR

En el discurso que el presidente Duarte tuvo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas quedó dibujada la orientación de su propuesta,

aunque después fue desarrollada en las reuniones de La Palma y Ayagualo. Por parte del FMLN-FDR sólo en Ayagualo se llegó a una presentación sistemática. Conviene estudiar ambas por separado para llegar después a un juicio sobre sus compatibilidades y sus posibilidades de ejecución.

La propuesta gubernamental ha permanecido idéntica en sus puntos principales. Parte de que el objetivo de la actual presidencia debe ser conseguir la paz: “la principal misión de mi mandato es aquella de lograr y obtener la armonía social y la paz interior de la República, situación seriamente convulsionada por un conflicto que tiene sus orígenes en causas internas y externas, pero al que es hora ya de poner fin,” como dijo Duarte ante las Naciones Unidas (*ECA*, 1984, 432-433, 846). Se señala a sí misma unos límites bien precisos: “concibo esta oferta dentro del marco de la Constitución salvadoreña que ha establecido como sistema la Democracia y el pluralismo político, de manera que puedan coexistir las más diversas ideologías” (*ib.*). Y lo esencial de ella consiste en dar seguridades a los que abandonando las armas quieren defender sus ideas con métodos pacíficos que les pueden dar el poder sólo por la vía de las elecciones. Se trata, pues, de lograr que se abandonen las armas y los métodos violentos para entrar en la lucha política; se lograría así la paz o, al menos, el cese de la guerra y la reinserción sin represalias de todos los que más o menos justificadamente en el pasado acudieron a las armas, como única forma de llevar adelante sus derechos.

Esta propuesta fundamental fue reiterada en La Palma, donde quedó articulada de forma más desarrollada. El presupuesto histórico nuevo era que, según la parte gubernamental, las cosas habían cambiado sustancialmente en El Salvador desde 1979 hasta hoy. Con este presupuesto Duarte dijo: “propongo la pacificación del país garantizando para tal fin, el espacio político necesario para que los alzados en armas puedan incorporarse a la vida y al trabajo dentro de la sociedad y a participar en el proceso político democrático” (“Propuesta gubernamental,” *ECA*, 1984, 432-433, 850). Este pensamiento central se repitió de diversas formas: “es indispensable poner fin a los esquemas de violencia como método de lucha para obtener el poder y lograr así la

Si en La Palma se inició el hecho mismo del diálogo, en Ayagualo se presentaron frente a frente dos propuestas fundamentalmente distintas.

reincorporación de los grupos alzados en armas al proceso democrático" (*ib.*) Todo ello implica el máximo respeto a la Constitución que delimita los puntos esenciales del proceso democrático, entre los cuales es importante subrayar que los partidos políticos constituyen el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno y que sólo se puede participar en el poder a través de esos partidos en elecciones honestas y periódicas. Para facilitar la incorporación de los alzados en armas al proceso democrático el presidente se propone conseguir una amnistía general inmediata e irrestricta, ofrece un control de cualquier exceso por parte de la Fuerza Armada contra quienes quieran reincorporarse a la vida social y política; igualmente se compromete a asegurar "la libre participación en la organización y actividades políticas" y la posibilidad de inscribirse como partido político, con todas las prerrogativas y derechos del resto de los partidos políticos (*ib.*).

En el documento presentado en Ayagualo se repetía una vez más lo esencial de la propuesta. El diálogo "deberá culminar con la incorporación de los grupos alzados en armas al proceso político de carácter democrático que se desarrolla en el país, previo el abandono de las armas, la finalización de las acciones violentas y el respeto a los principios y normas establecidas en la Constitución Política de la República" (*La Prensa Gráfica*, 3 de diciembre de 1984, 43). Se añadían algunos puntos concretos referentes a la humanización del conflicto que incluían 1) la eliminación de asesinatos, secuestros, amenazas, ataques a la población y cese de las represalias contra familiares de los funcionarios del Estado y de la Fuerza Armada; 2) el fin de la destrucción de la propiedad colectiva e individual; 3) el fin de la destrucción de la infraestructura del país; 4) respeto a la vida y dignidad de los combatientes y al personal sanitario, mientras que "el gobierno ratifica su voluntad de continuar cumpliendo con estos postulados humanitarios" (*ib.*).

La propuesta del FMLN-FDDR no pudo ser presentada hasta la reunión de Ayagualo, aunque ya en La Palma se había discrepado del punto de vista gubernamental. Mientras éste sostuvo que la situación de El Salvador había cambiado tan sustancialmente que ya no se necesitaba recurrir a las armas para llevar adelante la justicia, los frentes democráticos y revolucionarios sostuvieron que poco o nada había cambiado en lo fundamental y que, por tanto, ni se estaba en po-

sibilidad de participar en un proceso democrático ni se podía, en consecuencia, abandonar la protección de las armas.

Por eso, en Ayagualo frente a cualquier formalismo democrático, el FMLN-FDR pretendió hacer una propuesta "de cara a la realidad." "Las causas que empujaron a nuestros frentes a luchar utilizando medios políticos y militares, aún siguen vigentes: no han desaparecido los escuadrones de la muerte, ni las detenciones ilegales, ni las torturas, únicamente se han sofisticado. La mayoría de nuestro pueblo sigue excluida de la participación de la riqueza del país..." (Propuesta del FMLN-FDR," *El Mundo*, 13 de diciembre de 1984, 19). "En síntesis, El Salvador vive un estado de guerra generalizada; un alto grado de deterioro de las relaciones sociales; una situación insoslayable de doble poder; una falta de consenso político nacional; un acelerado proceso de enajenación de la soberanía nacional; un estado de violación sistemática de los derechos humanos y un severo agravamiento de las condiciones de vida de la población" (*ib.*). Por todo lo cual no creen en soluciones simplistas y formales, sino en soluciones que respondan "especialmente a la enconada polarización de la sociedad salvadoreña, a la compleja y profundamente arraigada situación de desconfianza recíproca entre las fuerzas políticas decisivas en la vida nacional y al enclave también profundo de la injerencia política y militar de la administración norteamericana en el conflicto salvadoreño" (*ib.*). Se subraya con firmeza particular que "no son posibles ya en El Salvador las soluciones diseñadas sobre la base del sometimiento de las organizaciones populares a los poderes establecidos" (*ib.*).

Dada la complejidad del problema, el FMLN-FDR propone proceder por fases, que se puede suponer son realmente sucesivas, de tal manera que no se puede llegar fundamentalmente a la siguiente si no se ha consolidado la anterior, cosa que realmente puede llevar bastante tiempo.

En la primera fase se mezclan dos cosas: por un lado, se busca recuperar la soberanía nacional para que seamos los salvadoreños quienes busquemos la solución y la llevemos a la práctica y, por otro, se busca la humanización del conflicto y la restauración de las libertades políticas. Desde esta doble perspectiva se propone: a) convocatoria de un foro nacional en el cual se expresen todos los sectores nacionales respecto de los caminos de solución; b) diversos acuerdos en mate-

ria de derechos humanos y libertades políticas que incluyen el desmantelamiento de los escuadrones de la muerte y el enjuiciamiento de los responsables de los crímenes más notorios, así como la abolición de la tortura, cese de secuestros y desapariciones de personas, derogación del estado de sitio y otros decretos represivos, garantía de la actividad sindical y política; c) acuerdos que lleven a la humanización de la guerra; d) acuerdos para el cese de la injerencia militar norteamericana; e) acuerdos en el cese de la armamentización por parte y parte; f) acuerdos sobre el cese del sabotaje a la economía también por parte y parte.

En la segunda fase se plantearía ya "la suspensión de hostilidades a partir de un sólido marco de acuerdo de garantía para ambas partes" (*ib.*) Es aquí donde se habla de que eso no se puede hacer sin un "acuerdo de efectiva participación en el Gobierno de todas las fuerzas políticas y sociales comprometidas en el proceso de solución negociada." aunque la integración del nuevo gobierno se deja para la tercera fase, ya en la segunda habría que asegurar desde él el fiel cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la negociación, el rescate de la independencia y de la soberanía nacional con el cese de cualquier

intervención extranjera de Estados Unidos o de cualquier otro país, la destrucción de los aparatos represivos. Sólo entonces se podría llegar a los dos puntos fundamentales que son el cese del fuego y la aprobación concertada de un calendario electoral. Por lo que toca al cese de fuego se proponen dos condiciones: "previa demarcación de territorio bajo control de cada una de las partes" y creación de "una comisión bipartita de ambos ejércitos para la verificación y control del cese de fuego" (*ib.*).

En la tercera fase se llegaría a integrar e instalar el gobierno de consenso nacional, se llegaría a una reforma constitucional que sería sometida a un referéndum nacional, se llevaría a cabo la reorganización de la Fuerza Armada "a partir de los dos ejércitos existentes" (*ib.*) y finalmente se llegaría a elecciones generales "auténticas y libres con la participación de todas las fuerzas políticas del país" (*ib.*). En esta tercera fase el objetivo es institucionalizar "las posibilidades de vida democrática surgidas del proceso de diálogo y negociación" (*ib.*). No se explica hacia dónde irían dirigidas las reformas de la Constitución, pero algunas de ellas irían hacia las transformaciones económicas y sociales estructurales y tam-



Hay coincidencia en el reconocimiento de que la situación actual del país es intolerable y que la prolongación de la guerra y del conflicto social pueden traer consecuencias irreparables...

bién a un nuevo ordenamiento político que respondiese mejor al estado actual de la realidad salvadoreña. Así en la Constitución quedaría plasmado un nuevo ordenamiento en el cual se harían presentes objetivos y medios representados por el movimiento revolucionario y que no han podido entrar todavía en el marco constitucional.

Presentado sucintamente lo esencial de las dos propuestas queda hacer su estudio comparativo. Se trata, desde luego, de dos propuestas muy distintas, tomadas en su totalidad, que responden a fuerzas sociales diversas y consecuentemente a planteamientos y enfoques muy dispares. A pesar de que la gubernamental no recoge las posiciones más extremistas del espectro salvadoreño, todavía se encuentra lejos de la ofrecida por el FMLN-FDR; y a pesar de que ésta se ha suavizado y ha reducido pretensiones unilaterales que presentaba hace cuatro años, todavía se encuentra lejos de la ofrecida por la parte gubernamental. Sin embargo, no todo es pura oposición por lo que no está de más hacer un esfuerzo por buscar coincidencias parciales que pueden llevar a acuerdos posteriores, los cuales a su vez pudieran superar diferencias que hoy parecen insalvables.

a) Las grandes líneas de convergencia entre las dos propuestas

Ante todo, hay coincidencia en el reconocimiento de que la situación actual del país es intolerable y que la prolongación de la guerra y aun del conflicto social puede traer consecuencias irreparables al pueblo salvadoreño. De ahí se sigue que han de emprenderse todos los medios razonables, entre ellos el del diálogo, para salir de esa situación de extrema violencia. Ambas partes reconocen la aspiración de paz del pueblo salvadoreño, la necesidad de encontrar cuanto antes una solución justa a la guerra y a las causas de la guerra.

También hay coincidencia en el reconocimiento de las principales causas de la guerra y del conflicto. El presidente Duarte reconoce que hay causas internas y externas del conflicto, poniendo entre ellas la secular injusticia estructural, la vigencia de una oligarquía que se resiste a los cambios estructurales y múltiples formas de

represión y violación de los derechos humanos, muy estrechamente relacionadas con la Fuerza Armada, los cuerpos de seguridad y los grupos paramilitares; entre las causas externas del conflicto señala la injerencia de potencias extranjeras y aunque da mayor importancia a la injerencia de Nicaragua, Cuba y el bloque socialista, no deja de reconocer el peso de la injerencia norteamericana. Por su parte, el FMLN-FDR pone como causas últimas del conflicto "la injusticia y la ausencia de democracia," reflejadas sobre todo en múltiples actos y formas de represión pero también en la desigualdad de la distribución de la riqueza, que mantiene a una gran parte de la población en niveles de vida inaceptables.

Asimismo hay coincidencia, al menos en principio y en abstracto, sobre los objetivos últimos que se deben perseguir: la implantación de un orden justo con libertad donde las mayorías populares alcancen a disfrutar tanto un estado satisfactorio de justicia social como de libertades políticas. La justicia social no podrá alcanzarse sin profundas y cada vez mayores reformas estructurales —y en esto se apartan ambas posiciones de la solución de la extrema derecha— y la libertad política sólo será alcanzable por una democracia real, de la que hayan desaparecido el abuso de poderosos grupos minoritarios, que amparados en la fuerza de las armas y en la militarización de la vida política, han vaciado a la democracia de todo sentido popular para convertirla en un caparazón formal donde el capitalismo reina a su antojo.

Estas coincidencias fundamentales hacen que diversas medidas operativas, situadas por el FMLN-FDR en la primera fase, puedan ser objeto de acuerdos, sobre todo aquellos que se refieren a materia de derechos humanos y de libertades políticas. Efectivamente, el desmantelamiento de los escuadrones de la muerte pedido por el FMLN-FDR es también propósito de la política del gobierno, como lo es en principio el propósito de enjuiciar a los responsables de los crímenes más notorios que se han perpetrado en el período 1979-1982. Aunque el presidente Duarte habla de una amnistía amplia e inmediata, podrían quedar excluidos de ella aquellos crímenes que la mayor parte del pueblo salvadoreño quiere que se esclarezcan y se castiguen. En

... también hay coincidencias en el reconocimiento de las principales causas de la guerra..

...al menos, en principio y en abstracto, sobre los objetivos últimos que se deben perseguir: la implantación de un orden justo con libertad...

esta misma línea no sería difícil acordar medidas más efectivas y satisfactorias para llegar a la total abolición de la tortura, al cese de secuestros y desapariciones, al control de todo abuso de poder. Todos estos puntos de suma importancia para la democratización y pacificación del país son obligación del gobierno constitucional, pero la aceleración en su cumplimiento, exigida por el FMLN-FDR, puede ser objeto de acuerdo.

También hay coincidencias importantes en el capítulo de la humanización de la guerra, al cual se refieren muy explícitamente ambas partes en sus propuestas. Así, el gobierno propone: "los alzados en armas deben a su vez comprometerse a una conducta de respeto a la vida de los combatientes que resultaren heridos o privados de su libertad..." mientras que el FMLN-FDR propone: "ambas partes se comprometerán a dar cumplimiento a los convenios de Ginebra, con énfasis en lo que respecta al cese de los bombardeos contra la población civil y sus haberes; respeto a la vida y a la integridad física de oficiales y tropas prisioneras de ambos ejércitos; respeto, atención y evacuación de lisiados de guerra; respeto al personal médico y paramédico de ambos ejércitos y a sus instalaciones médicas," puntos en los que también se extiende la propuesta de Duarte. En este mismo capítulo de la humanización debería ser aceptada por el FMLN la eliminación de asesinatos, secuestros, amenazas a la vida e integridad física y la eliminación de bombas, asaltos y destrucción de la propiedad colectiva e individual, tal como lo propone el gobierno. Incluso en el difícil problema del sabotaje, que el FMLN considera parte importante de su estrategia militar, las posiciones no son tan diversas: el gobierno propone eliminar y terminar con la destrucción de la infraestructura del país, mientras que el FMLN-FDR propone que ambas partes se comprometan "a cesar totalmente el sabotaje económico, como contribución al progreso de la negociación." Todo un enorme campo de coincidencias, al menos teóricas, que permitirían un acercamiento de posiciones y sin duda conseguirían el benéplacito de la mayor parte de la población.

Incluso en el espinoso problema de terminar con la injerencia extranjera y con el cese de la armamentización, el gobierno nacionalista de Duarte debería estar de acuerdo, al menos en

principio y siempre que fuera mutua y efectivamente verificable, con la propuesta del FMLN-FDR. Naturalmente es uno de los puntos en donde el gobierno civil de Duarte está sometido a más presiones tanto de Estados Unidos como de la propia Fuerza Armada, la cual se vería sumamente debilitada con la suspensión de toda ayuda militar extranjera. Pero la audaz propuesta del FMLN-FDR, al tiempo que demuestra cómo su dependencia del exterior no es fundamental, coincide con algunos de los propósitos ideales del gobierno democristiano. Sobre este asunto su autonomía pudiera no ser muy grande, pero la justeza de lo propuesto no puede negarse. Aunque Duarte justifica esta ayuda exterior porque su gobierno constitucional se ve agredido por fuerzas exteriores al país o, al menos, ayudadas militarmente desde el exterior, según sus principios doctrinales tendría que rechazar aquella ayuda si se le asegurase que los alzados en armas ya no la reciben desde fuera. Lo mismo cabe decir del cese de la armamentización que mantendría la destrucción de la guerra en límites cada vez más bajos. Ambas medidas, además, estarían muy conformes con lo que el grupo de Contadora está proponiendo para el área centroamericana, salvo las cautelas del caso. El FMLN-FDR está en su pleno derecho al pedir estos puntos y el gobierno de Duarte está en la obligación de tomarlos en cuenta y de llevarlos a la práctica.

La derogación del estado de sitio y de otros decretos que limitan las libertades políticas fundamentales y permiten atribuciones no constitucionales a los cuerpos de seguridad tampoco es dificultad insalvable, por cuanto la plena vigencia de la Constitución es uno de los propósitos fundamentales más exaltados por Duarte. Y aunque la Constitución permite el estado de sitio, su prolongación indefinida lleva consigo un permanente deterioro del orden constitucional. Por eso también aquí puede verse una posibilidad seria de convergencia, si no de coincidencia.

Con lo cual tendríamos que las principales líneas de lo propuesto por el FMLN-FDR en su primera fase son del todo punto discutibles, más aún se sitúan en una cierta unidad de propósitos, que permitiría llegar a acuerdos, difíciles en su concreción, pero perfectamente obtenibles, si se quiere hacer de la teoría política un principio de

realización práctica. Ni siquiera la convocatoria de un foro nacional representa de por sí una dificultad mayor; en él no se propone otra cosa que una nueva forma de participación popular que respalde el diálogo y que le proporcione su verdadera dimensión nacional. Ni siquiera tiene que verse como un sustituto de la asamblea legislativa, por cuanto de él sólo se espera que se aporten soluciones o vías de solución al conflicto político y social que vive el país. Podrá discutirse qué modalidades debiera tener, pero la idea en sí no es de difícil asimilación.

Las medidas previas que propone el gobierno, ya hemos indicado, para que pueda detenerse la ola de la violencia y pueda avanzar el diálogo son también perfectamente acordables, porque, aunque están vistas desde otra perspectiva, coinciden con las pedidas por el FMLN-FDR. Hay, pues, en todo este enorme capítulo, cuya importancia para el pueblo no puede desconocerse, toda una serie de medidas factibles que pueden ser dialogadas y tras el diálogo acordadas y verificadas sin tener que definir muy precisamente si se está o no ya dentro de una negociación estrictamente tal. Las cuestiones verbales pueden tener su importancia a la hora de reconocer el estatuto jurídico del FMLN-FDR, pero deberían pasar a segundo plano ante la urgencia de las cuestiones reales. Ni una parte ni la otra tendrían por qué afanarse en conseguir victorias verbales, sino más deberían esforzarse en conseguir pasos efectivos, que más tarde recibirán su respaldo verbal y jurídico. Es el gobierno de Duarte quien tiene mayores dificultades en este punto y el FMLN-FDR podría ser comprensible con ellas, si es que realmente busca la consolidación del diálogo y no poner dificultades accesorias a un problema ya de por sí asaz difícil.

b) Los puntos de divergencia en las dos propuestas

Reconocidas las grandes líneas de convergencia es menester analizar también los puntos de divergencia, cuya importancia no se puede desconocer. No en vano las dos partes dialogantes están hoy enfrentadas frontalmente, tanto en lo político como en lo militar.

Un punto de divergencia fundamental es la muy distinta valoración que unos y otros tienen del momento presente de El Salvador. Mientras el presidente Duarte aprecia cambios sustanciales en lo económico, en lo político, en los derechos humanos, etc., el FMLN-FDR sostiene que en lo

fundamental poco ha cambiado: sigue la efectividad de las fuerzas oligárquicas tanto en el ordenamiento económico como en su influjo sobre la casi totalidad de las fuerzas sociales, especialmente sobre la Fuerza Armada; sigue la represión que hace imposible la presencia del FMLN-FDR en la arena pública de El Salvador e incluso la presencia de quienes sólo son sus simpatizantes; sigue la subordinación casi total del gobierno a los dictámenes de la administración Reagan, la cual mira más por la seguridad y hegemonía de Estados Unidos que por la paz y el bienestar de El Salvador; sigue en lo fundamental toda la estructura anterior que no dejó otra salida al FMLN-FDR que la de alzarse en armas, una vez cerrada la posibilidad de una salida pacífica. Así y en consecuencia, mientras el presidente Duarte cree que la realidad de El Salvador ya ha cambiado sustancialmente y permite y aun exige el abandono de las armas, el FMLN-FDR piensa que no y que, por tanto, no ha llegado todavía la hora de venir sin más a la lucha política dejando del todo el respaldo de su poder militar.

También se da una divergencia muy importante en la autoridad política y legitimidad moral que cada una de las partes se atribuye a sí misma y atribuye a la contraria. El presidente Duarte piensa contar con una legitimidad total al haber sido elegido libremente en unos comicios caracterizados por la afluencia masiva de votantes y por el carácter libre y no fraudulento de los mismos en el marco de una Constitución que habría sido aprobada con toda legalidad por una asamblea, también elegida con todas las garantías; sus oponentes no están de acuerdo con este planteamiento, pues desconocen la legitimidad moral de ambos eventos electorales por cuanto se dieron en circunstancias que no permitían la expresión democrática de la voluntad popular, confirmando este juicio por el hecho innegable de que a ellos no les fue posible participar. Por su parte, el FMLN-FDR considera que cuenta con verdadera legitimidad y con un firme respaldo de gran parte de la población, en razón de que ha defendido durante años, con grandes sacrificios, los intereses de las mayorías populares, de que ha sido víctima de una represión espantosa y de que ha conseguido un poder militar capaz de desestabilizar completamente a sus adversarios, si estos no fueran respaldados por una potencia extranjera. De ahí que el FMLN-FDR sostenga que en El Salvador se dan hoy dos poderes en conflicto, mientras que Duarte sostiene que sólo se da un



poder legítimo, un poder que por otra parte tiene una consistencia que no tiene el FMLN-FDR, al que considera tan sólo como un grupo alzado en armas, el cual pudo tener justificación años atrás, pero que no la tiene ya. El presidente Duarte acepta que el FMLN-FDR sea una fuerza y aun un poder fáctico con el cual ha de llegarse a algún acuerdo, pero no le atribuye ya ninguna legitimidad y menos acepta que se trate de dos poderes con los mismos derechos o dos poderes que deban tratarse de igual a igual. Ni de hecho ni de derecho está dispuesto a aceptar tal planteamiento. Incluso no quisiera hacer nada que los legitime ni quisiera como parte beligerante en una guerra civil.

De ellos se sigue otra discrepancia esencial. La oferta de Duarte es que sus adversarios depongan las armas y entren a la lucha política con su culminación rutinaria en un proceso electoral, cuyas pautas están normadas por la Constitución. Las dificultades para ello las considera accidentales y superables, pues piensa estar en capacidad de controlar los escuadrones y/o los abusos de los distintos cuerpos de seguridad. La oferta del FMLN-FDR, presupone que no ha habido elecciones legítimas y que se debe establecer un proceso largo de democratización y autonomía nacional para poder desembocar en una elección, cosa que no se puede lograr si, entre otras cosas, no se consolida un gobierno de

consenso nacional y una radical transformación de la Fuerza Armada. Ambas partes coinciden en que es necesario llegar a un proceso electoral, pero una piensa que ése ya se ha dado con suficientes garantías, mientras que la otra estima que el resultado de esas elecciones no es vinculante por cuanto tuvieron vicios fundamentales invalidantes.

De ahí que los pasos apuntados por el FMLN-FDR en la segunda y tercera fase sean difíciles de aceptar por el presidente constitucional. Por lo que toca a la segunda fase, en principio, no debería haber grandes dificultades. Ciertamente, en ella se propone un acuerdo de participación en el gobierno, en un gobierno en el que se supone estaría la democracia cristiana, el FMLN-FDR y también otros partidos y fuerzas no pertenecientes a la extrema derecha. Tal alianza ya se ha dado en 1972, en 1977 y en 1979, por lo cual no habría por qué asustarse ahora. Ni tiene esto nada de anticonstitucional, siempre que se legalice la situación política del FMLN-FDR, cosa ciertamente imposible, dentro del marco constitucional, mientras no deponga las armas. Cabe de todas formas la constitución de un gobierno de consenso que, dirigido por la democracia cristiana, cuente con miembros que garanticen realmente los intereses y derechos de las mayorías populares sin por ello dañar los derechos e intereses justos de las minorías. Porque

...también hay coincidencias importantes en el capítulo de la humanización de la guerra.

lo importante sería asegurar los objetivos que se le proponen a este gobierno, todos ellos aceptables y negociables: rescate de la independencia y soberanía nacional, cese de la injerencia exterior, destrucción del aparato represivo, preparar medidas para terminar con el estado de guerra, atender las necesidades urgentes de las mayorías populares, etc. El adoptar un calendario electoral sí puede entrar en colisión con preceptos constitucionales y leyes secundarias, lo cual pondría en dificultades al presidente constitucional. Si todo esto, excepto el último punto, lo pudiera asegurar efectiva y comprobadamente el actual gobierno en un tiempo prudencial cosa por demás obligatoria para él desde las exigencias de la Constitución, tal vez no fuera necesario en este momento un gobierno de amplia participación, aunque sí conveniente.

En la concertación del alto al fuego que se propone en la segunda fase es donde pueden estar las dificultades mayores, sobre todo si se tiene en cuenta lo que se apunta en la tercera fase. El punto más difícil está en que el cese de fuego se acordaría "previa demarcación del territorio bajo control de cada una de las partes" y con la puesta en marcha de una comisión bipartita de ambos ejércitos para la verificación y control del cese de fuego. Naturalmente que a estas propuestas se les puede dar una interpretación maximalista o una interpretación minimalista, lo cual haría cambiar mucho las cosas. Podría ser aceptable un cese de fuego que incluyese la estabilización de la situación presente, la cual incluiría en la práctica un período en que ninguna de las partes hiciese ningún tipo de incursión militar; bastaría, pues, con una tregua que reconociese una situación de hecho, mientras se llega a una solución final. Pero al gobierno no le resulta aceptable, ni se lo tolerarían otras fuerzas, pues la delimitación de territorios implica una división territorial del país, lo cual a la larga supondría como poco una libanización de El Salvador de fatales consecuencias para el futuro. Por otra parte, la discusión de qué zonas están bajo control sería ya de por sí una discusión inacabable, pues mientras la Fuerza Armada argüiría que puede poner bajo su control cualquier parte del país, al menos rotativamente, el FMLN argüiría que de hecho buena parte del año amplias zonas del país son territorio bajo su control. Que

esa tregua, más que cese de fuego, fuera controlada por una comisión bipartita de los dos ejércitos, es algo de difícil realización, por cuanto el gobierno no está en condiciones de aceptar la existencia oficial de dos ejércitos en pie de igualdad, como una y otra vez lo ha repetido el presidente Duarte. Tanto, pues, en el modo de entender el cese de fuego como en la garantía del mismo hay diferencias fundamentales, difíciles de superar, si no se encuentran fórmulas nuevas que, respetando la finalidad pretendida en sí buena, no resulten inaceptables para una o ambas de las partes y sean, sin embargo, efectivas para el fin que se pretende.

Es, naturalmente, en la tercera fase donde las posiciones son más distantes. Ante todo, porque la segunda parece reducirse a acuerdos y compromisos sin llegar todavía a realizaciones, pero también porque en la tercera se entra ya en soluciones finales que tocan puntos de casi imposible aceptación por parte del gobierno no sólo por razones de su debilidad, sino también por razones de legalidad. Entre ellos el de mayor dificultad es el de la reorganización del ejército "a partir de los dos ejércitos existentes." Que el país necesite una reorganización del ejército es algo innegable tanto por razones políticas como por razones profesionales; fue la propia Fuerza Armada en su proclama del 15 de octubre de 1979 la que reconoció que el ejército había sido cómplice de los grandes males del país, cosa agravada por lo sucedido en la más terrible represión que ha sufrido el país en toda su historia durante los años 1979-1984. Aunque pueden reconocerse mejoras importantes, tanto en el desempeño profesional de la Fuerza Armada como en su disposición política de separarse de la extrema derecha económica y política y de disminuir significativamente, aunque no totalmente, sus prácticas represivas, todavía queda mucho por hacer y lograr, lo cual no es posible sin una reorganización de la Fuerza Armada la cual todavía no se está dando real y efectivamente, a pesar de algunos cambios importantes en sus mandos. Por otro lado, no puede negarse la existencia de un ejército rebelde con más de diez mil hombres, lo cual implica un alto número de comandantes, que ha demostrado una capacidad militar extraordinaria, que podría y debería ser aprovechada. Hay antecedentes históricos de este tipo de reor-

Un punto de divergencia fundamental es la muy distinta valoración que unos y otros tienen del momento presente.

ganización, al menos en los casos en que no es posible un triunfo militar de ninguna de las dos partes, pero no hay duda de que se trata de algo difícil. El ejército es pieza clave en la política de El Salvador, pues hacia donde él se incline, se inclinará la dirección política. Y mientras el país no quede razonablemente desmilitarizado, es imprescindible que la institución armada sufra profundas transformaciones de todo tipo y lleve a cabo una reorganización sustancial.

Los otros puntos de la tercera fase pueden ser más aceptables, al menos en términos reales si no en términos legales. La integración de un nuevo gobierno, reformas constitucionales a ser posible por vía constitucional y nueva convocatoria a elecciones generales del tipo que sean, admiten acuerdos razonables, si es que se ha resuelto de antemano la reorganización del ejército. Con todo ello, no se entregaría el poder al FMLN-FDR y menos de forma definitiva, sino que tan sólo se le daría presencia en él, más a modo de gestión provisional que a modo de participación hegemónica. Lo que piden en esta fase son garantías reales más que toma del poder que no lo habrían conseguido ni por los votos ni por las armas.

4. Posibilidad de consolidación del diálogo

Estando así las cosas no pueden esconderse las dificultades para que el diálogo prospere y lleve a soluciones definitivas y sustanciales. El diálogo cada vez más aparece como necesario y también como posible y exigible, pero las dificultades están ahí y hay que superarlas lúcida y pacientemente porque de lo contrario el diálogo naufragará y con él una de las últimas posibilidades de salir menos mal de este conflicto y de esta tragedia que vive El Salvador.

Una fuente de dificultades está en el relativo poco campo en el relativo poco poder con que cuenta el gobierno de Duarte. No sólo tiene en contra a la todavía poderosa derecha económica y militar, sino que ni siquiera puede contar con la sumisión fiel de la Fuerza Armada, deseosa de intervenir en las grandes decisiones políticas y desde luego en todo aquello que pueda afectarla como institución. Tiene también en contra, por lo menos hasta las próximas elecciones de marzo de 1985, a la asamblea legislativa y también a la

corte suprema de justicia. Asimismo, el apoyo fundamental que le presta Estados Unidos está absolutamente condicionado a que no ofrezca ventajas sustanciales al FMLN-FDR, cosa que sería inevitable en un diálogo y/o negociación, que fuera realmente serio y eficaz. De ahí se sigue que si el FMLN-FDR desea consolidar el diálogo tiene que respetar el ritmo posible sin tratar de acelerar un proceso que, cambiado de ritmo en sus logros y concesiones, podría fracasar.

Otra fuente de dificultades está en la complejidad misma de la situación. A corto plazo, para la finalización de la guerra y a mediano plazo para la reconstrucción económica y política del país, la situación misma de El Salvador presenta problemas de enorme complejidad. No sólo es la guerra con todo lo que ello significa, sobre todo cuando la guerra tiene características de guerra civil como es en nuestro caso, sino que es la enorme división y aún polarización que hacen imposible un consenso nacional y un proyecto que responda a ese consenso. Un consenso entre las fuerzas de centro no es posible, porque ese centro apenas existe y desde luego no tiene fuerza suficiente para imponerse; un consenso entre los partidos que hoy tienen representación en la asamblea no se ve muy prometedor, pues cuando lo ha habido sus resultados han sido escasos y hoy no parece que pueda darse, al menos si en él han de entrar el PDC y ARENA; un consenso táctico como el que se está dando entre ARENA y el PCN no tiene consistencia en sí mismo y no es de momento la carta jugada por Estados Unidos. Quedaría un consenso entre el PDC, AD y FMLN-FDR, no para formar una alianza, cosa que hoy es imposible, pero sí para delinear un proyecto de acción, que dejando fuera al extremismo de derecha, a los sectores oligárquicos o relacionados con ellos, abriera nuevos cauces sociales y políticos.

Asimismo otra fuente de dificultades puede estar en el maximalismo que busque imponer el sector más revolucionario del FMLN-FDR. Lo que se abre con el diálogo es un proceso y en un proceso lo importante no son las metas alcanzadas de inmediato, sino los dinamismos que van a predominar en él. Es comprensible que el FMLN-FDR no abandone sus muchos años de lucha, sus miles de muertos, su actual potencia militar, sus ideales políticos, las exigencias de sus

bases por un plato de lentejas o por un espejismo democrático; sigue representando la fuerza mayor para impulsar los intereses de las mayorías populares, mientras exista una oligarquía que se resiste a abandonar sus posiciones. Pero no es tan comprensible que el FMLN-FDR no mida bien los límites de su poder real, presente y futuro, de los modos posibles de ese poder que han de evolucionar y de las fuerzas internacionales que, guste o no guste, son una realidad a la hora de posibilitar un final de la guerra y a la hora de proyectar una reconstrucción nacional. La incesante renovación que ha ido emprendiendo el FMLN-FDR y que tuvo su punto más crítico en la lucha por el poder dentro de las FPL y en la lucha por una nueva línea de acción, debe proseguir para poder medir qué es en cada momento posible para conseguir finalmente el ideal pretendido o lo que más se puede acercar a ese ideal.

Todo este conjunto de dificultades está contra el éxito del diálogo, pero no anula sus posibilidades. Recordemos el amplio capítulo de coincidencias que puede apreciarse entre las posiciones gubernamentales y las posiciones de los frentes, recogido en estas mismas páginas. Esas coincidencias se fundan en el rechazo que ambas partes pueden tener de las funestas consecuencias que ha tenido para el pueblo salvadoreño la hegemonía secular, todavía no rota, de la oligarquía, ya se presente en su forma tradicional, ya en su forma más disfrazada de derecha económica, política y militar. Es evidente que el gobierno de Duarte es combatido, todavía no muy abiertamente, por los sectores oligárquicos y empresariales que ven en el a un contrario peligroso, que puede debilitar sustancialmente sus posiciones de privilegio. Este hecho debe ser recogido por el FMLN-FDR y utilizado para debilitar al enemigo común. Sería ceguera pensar que el mayor enemigo para posibles desarrollos ulteriores, fuera la consolidación de Duarte, puesto que implicaría hacer del adversario coyunturalmente más fuerte ahora, el adversario estructural e históricamente más fuerte. Alguien ha escrito que la tarea más urgente y necesaria en casi toda la América Latina es terminar con la vigencia histórica de la oligarquía en el área, sin poner la mira en otras formas distintas de presentarse el capitalismo o el imperialismo. La historia tiene sus

fases, tiene su línea procesual y es importante saber en cada momento qué hora real marca el reloj de la historia. Si se acepta este planteamiento, hasta cierto punto reflejado en el amplio campo de coincidencias que hemos examinado, el proceso difícil del diálogo puede dar buenos resultados, siempre que no tenga por objetivo el debilitar a las partes dialogantes, sino el de buscar soluciones reales, que favorezcan al pueblo y debiliten el poder oligárquico.

Desde este punto de vista es importante tomar en serio el carácter procesual que va implícitamente reconocido en las tres fases propuestas por el FMLN-FDR. En ese sentido, la próxima etapa del diálogo podría centrarse ya en ella. Si el FMLN-FDR reconoce que finalmente serán las elecciones las que decidirán el futuro del país, ha aceptado ya un principio fundamental de la posición de sus contrarios. A la invitación de Duarte para que participen en los procesos electorales y antes en la vida política, depuestas las armas, puede responder que lo hará en cuanto se den las condiciones necesarias para ello. Muchas de estas condiciones están en las propuestas de la primera fase. Si el gobierno lograra implementarlas, como más arriba insinuábamos, no sólo aumentaría su legitimidad y su respaldo popular, sino que demostraría al FMLN-FDR, que no es necesaria su participación inmediata y forma en el gobierno para garantizar algunos pasos imprescindibles, sin los cuales su entrada abierta en la vida política del sector bajo control gubernamental sería un suicidio.

La consolidación de esa primera fase puede y debe ser un punto fundamental de coincidencia, que favorecería enormemente al pueblo todo y que haría mucho más fácil el reconsiderar cómo seguir en la segunda y en la tercera fase, sobre las que de momento no es necesario dialogar en detalle, por cuanto no tienen sentido, si es que no se han cumplido ni siquiera los aspectos fundamentales señalados en la primera. El gran argumento que puede ofrecer la parte gubernamental para no aceptar de momento algunos de los puntos de la segunda y de la tercera fase sería que puede garantizar su autoridad y su poder precisamente en la realización de lo propuesto en la primera. Sólo en caso de que no pudiera demostrar esta autori-

También se da una divergencia muy importante en la autoridad política y la legitimidad moral que cada una de las partes se atribuye a sí misma y atribuye a la contraria.

La oferta de Duarte es que sus adversarios depongan las armas y entren en la lucha política y electoral, cuyas pautas están normadas por la Constitución.

dad y este poder, el FMLN-FDR podría insistir en que sólo cambios sustanciales en el ejército y en el gobierno son la garantía de que se puede acabar con la guerra porque se puede garantizar la paz y las libertades fundamentales de los ciudadanos. Pero si se van cumpliendo cada vez mejor los puntos principales señalados en la fase primera, el FMLN-FDR podría ir acomodando sus exigencias a los logros posibles de la otra parte.

El avance sostenido y consolidado en los aspectos esenciales de los derechos humanos y de las libertades democráticas, con los ojos más puestos en el futuro que en el pasado, puede suponer a la corta el entrar en una situación nueva, que pudiera facilitar mucho el trabajo y la incorporación del FMLN-FDR al proceso de democratización, sin que necesariamente esto suponga el abandono de las armas, aunque puede posibilitar ciertas formas parciales de cese del fuego. De este avance no podrán menos de salir favorecidos ambos bandos dialogantes y aun todos aquellos que presten su apoyo al diálogo, mientras que quedarán desfavorecidos aquellos otros sectores que se oponen a él, de tal modo que el progreso en el diálogo ha de verse no sólo como un progreso en la pacificación y democratización, sino al mismo tiempo como un progreso en el debilitamiento de los sectores oligárquicos. Así lo ven éstos y por eso después de unos momentos de vacilación se han decidido por oponerse a la continuación del mismo y desde luego por retirarse de toda comisión asesora, que les atara las manos para el ataque frontal.

Sólo ellos hasta ahora se han opuesto al diálogo, aunque hay todavía partidos políticos como el PCN y amplios sectores sociales que vacilan en darle un respaldo firme. En parte esto se debe a que el PDC quiere capitalizar para las próximas elecciones todo el simbolismo del diálogo, por lo cual los otros partidos y sectores sociales no quieren de momento dar un franco apoyo que se les puede revertir o que simplemente no les va a favorecer en los próximos comicios. Sin embargo, el PCN volvería a dar pasos atrás, si es que se aliara con ARENA en el repudio del diálogo. Una vez más, en los momentos decisivos se habría alineado con la extrema derecha, con lo cual perdería credibilidad al presentarse como un

partido moderado que tratara de ocupar el espacio del centro político.

Es necesario, por tanto, que la mayor parte de las fuerzas sociales y políticas se inclinen a respaldar lo más firmemente posible el diálogo. Desde ese punto de vista, la idea de un foro nacional u otra similar debe ser bien recibida, por cuanto permite abrir posibilidades de consenso, una vez asegurada la posibilidad de libre expresión. La Iglesia puede y debe seguir jugando el papel que ha tomado de impulsora decidida de la vía del diálogo, a la par que se mantiene con las manos libres para desempeñar su función de moderadora; por ello ha sido atacada y ese mismo hecho indica quiénes y por qué se oponen al diálogo; el recuerdo que se hace en tal coyuntura de Mons. Romero no deja de ser significativo, pues se trataría de nuevo de lo mismo, aunque por diferentes medios. También lo pueden hacer otras instancias dispuestas a que la razón prevalezca sobre la fuerza, a que se acorten al máximo los sufrimientos, las angustias y la devastación que se han abatido, estos años más que nunca, sobre la mayor parte del pueblo salvadoreño. Con ello podrían irse superando las dificultades innegables que tiene el proceso, en el cual está en juego no sólo el futuro del gobierno y del FMLN-FDR, sino mucho del presente y del futuro de todo el pueblo salvadoreño.

Como decíamos en las primeras páginas de este artículo el proceso del diálogo no está en un momento propicio. Quizá el presidente Duarte lo inició demasiado pronto, confiando en que su posición era más firme frente a la extrema derecha, frente a la Fuerza Armada y frente a Estados Unidos. Bastó con que se diera bastante bien el primer paso para que las poderosas fuerzas enemigas del diálogo se pusieran en marcha. Hoy están contentas estas fuerzas. Creen que pueden detenerlo y con ello debilitar la presidencia de Duarte en los próximos meses. La actividad del FMLN-FDR ha contribuido a ello; no sólo ha puesto a prueba la capacidad de Duarte para el diálogo, sino que ha limitado momentáneamente esa capacidad, al presentar en Ayagualo posiciones que son absolutamente inaceptables para la extrema derecha, para amplios sectores de la Fuerza Armada y para Estados Unidos. Para la extrema derecha y para amplios sectores de la

Fuerza Armada el mayor fracaso del diálogo es su éxito máximo; para Estados Unidos el relativo fracaso del diálogo es un relativo éxito, mientras que el éxito relativo del diálogo es para Duarte un éxito parcial y el éxito total del diálogo es para el FMLN-FDR un éxito importante. No verlo así es un error de la izquierda, que puede volver a favorecer el endurecimiento de la situación por incompreensión del momento como lo hizo en 1976 con la transformación agraria, en 1979 con el golpe de octubre, en 1980 con las posiciones moderadas de Majano. Este criterio de a quién favorece y a quién desfavorece el diálogo es comprobable y las posiciones que respecto de él tienen los sectores extremistas, hoy ya satisfechos por-

que ven el diálogo en malas condiciones, deben iluminar a quienes piensan que lo más urgente en El Salvador de momento y lo más importante para el futuro es relegar de una vez por todas a la oligarquía al lugar que le corresponde. Hoy la oligarquía está segura de conservar su puesto secular, si el diálogo fracasa, como se sintió segura cuando fracasó el golpe del 15 de octubre. No todo está todavía perdido, pero está ya en trance de perderse. Y si se pierde la oportunidad del diálogo se malbarata y destruye otra vez una sólida esperanza para la mayor parte del pueblo salvadoreño. La responsabilidad será de quien la haya imposibilitado o simplemente no favorecido como se debiera.

San Salvador, 28 de diciembre de 1984.

